



Asamblea General

Distr. general
9 de mayo de 2024
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 99º período de sesiones, 18 a 27 de marzo de 2024

Opinión núm. 2/2024, relativa a Alavedi Buvacir, Hudavedi Bumeyrem, Abudukelimu Alimu, Abuduli Aibibu y Bahaguli Aibibu (China)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 51/8.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, el Grupo de Trabajo transmitió el 26 de octubre de 2023 al Gobierno de China una comunicación relativa a Alavedi Buvacir, Hudavedi Bumeyrem, Abudukelimu Alimu, Abuduli Aibibu y Bahaguli Aibibu. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

* Miriam Estrada Castillo no participó en el examen del presente caso.

¹ [A/HRC/36/38](#).



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

1. Información recibida

a) Comunicación de la fuente

4. Alavedi Buvacir es nacional de China. La Sra. Buvacir es ama de casa y reside habitualmente en la ciudad de Kasghar, en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. Tenía 48 años en el momento de su detención.

5. Hudavedi Bumeyrem es nacional de China. Reside habitualmente en la ciudad de Kasghar, en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. Tenía 29 años en el momento de su detención.

6. Abudukelimu Alimu es nacional de China, nacido en 1989. Reside habitualmente en Urumqi, en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur.

7. Abuduli Aibibu es nacional de China, nacido en 1941. El Sr. Alimu es un policía jubilado. Sirvió en las fuerzas de policía durante 30 años antes de jubilarse en 1998. Reside habitualmente en Turfan, en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur.

8. Bahaguli Aibibu es nacional de China, nacida en 1983. Se graduó con mención especial en Economía y Finanzas por la Universidad de Xinjiang. Tras graduarse, empezó a trabajar para la empresa china de telecomunicaciones ferroviarias. Reside habitualmente en Turfan, en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur.

i) *Detención y reclusión de la Sra. Buvacir y la Sra. Bumeyrem*

9. La fuente señala que la Sra. Buvacir y la Sra. Bumeyrem son madre e hija, y que tienen parientes que residen en Türkiye. En 2019, fueron detenidas por autoridades policiales en su domicilio, en la ciudad de Kasghar, en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. No se les mostró ninguna orden de detención ni se les informó de los motivos de esta.

10. En la actualidad, se cree que tanto la Sra. Buvacir como la Sra. Bumeyrem están recluidas en régimen de incomunicación en uno de los campos de reeducación situados en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. Los familiares que residen en el extranjero no han podido ponerse en contacto con ninguna de ellas. Al parecer, la mayoría de sus familiares residentes en China también se encuentran privados de libertad.

11. Además, las autoridades no han facilitado información sobre el paradero exacto o los motivos de la detención de la Sra. Buvacir ni de la Sra. Bumeyrem, a pesar de las solicitudes realizadas ante el consulado de China en los Estados donde residen los familiares en el extranjero. Asimismo, se desconocen los fundamentos jurídicos de la detención de la Sra. Buvacir y la Sra. Bumeyrem, los cargos que se les imputan y la legislación pertinente aplicada.

12. La fuente sostiene que la actual reclusión en régimen de incomunicación sin cargos de la Sra. Buvacir y la Sra. Bumeyrem es uno de los ejemplos de la persecución que ejercen las autoridades contra personas de etnia uigur, que constituye una violación grave de los derechos humanos fundamentales que las asisten en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

ii) *Detención y reclusión del Sr. Alimu*

13. La fuente señala que el Sr. Alimu fue detenido el 28 de agosto de 2017 a medianoche en su domicilio por las autoridades chinas. No se le mostró ninguna orden de detención ni se le informó de los motivos de esta.

14. El Sr. Alimu permanece actualmente privado de libertad en régimen de incomunicación. También se desconoce su paradero exacto, así como los fundamentos jurídicos de su detención, los cargos que se le imputan y la legislación pertinente aplicada.

15. Al parecer, durante los dos años siguientes a la detención del Sr. Alimu, su familia no pudo obtener ninguna información sobre su paradero. Entonces se supo que posiblemente estuviera en una prisión de la ciudad de Korla, situada en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur.

16. La fuente informa de que, finalmente, las autoridades chinas permitieron al Sr. Alimu hablar con un pariente cercano. Sin embargo, solo se les permitió comunicarse en chino. Dado que el familiar no hablaba esa lengua, la conversación no pudo tener lugar.

17. Habida cuenta de que el Sr. Alimu permanece incomunicado y de que se desconoce su paradero exacto, existe una gran preocupación por su vida y su salud.

18. La fuente sostiene que la actual reclusión en régimen de incomunicación sin cargos del Sr. Alimu es uno de los ejemplos de la persecución que ejercen las autoridades contra personas de etnia uigur y que constituye una violación grave de los derechos humanos fundamentales que lo asisten en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

iii) *Detención y reclusión del Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu*

19. La fuente señala que el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu son padre e hija, y que tienen parientes que residen en Türkiye. Según la fuente, en octubre de 2017, el Sr. Aibibu fue detenido por las autoridades en su domicilio, en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. No se le mostró ninguna orden de detención ni se le informó de los motivos de esta.

20. La fuente precisa que la detención se produjo después de que el Sr. Aibibu regresara de Türkiye, adonde había viajado para conocer a su nieto recién nacido. Tras su detención, el Sr. Aibibu fue trasladado a uno de los campos de reeducación de la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. Fue puesto en libertad durante un breve período de tiempo en enero de 2019, pero volvió a ser detenido en abril de 2020.

21. Se cree que actualmente está privado de libertad en uno de los campos de reeducación. Las autoridades no han comunicado el motivo de su reclusión prolongada. También se desconocen los fundamentos jurídicos de la detención y la legislación pertinente aplicada. Desde el momento de su detención hasta que se presentó la comunicación, el Sr. Aibibu permaneció en paradero desconocido y no fue posible mantener contacto alguno con él.

22. Dado que el Sr. Aibibu tiene actualmente 83 años de edad y permanece incomunicado, existen graves preocupaciones con respecto a su vida y su salud.

23. La fuente señala que, en 2018, se supo que toda la familia del Sr. Aibibu que residía en China, incluida su hija, la Sra. Aibibu, había sido internada en campos de reeducación.

24. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que la Sra. Aibibu fue detenida por autoridades policiales en dos ocasiones, el 11 de junio de 2017 y el 6 de noviembre de 2019, en su domicilio. No se le mostró ninguna orden de detención ni se le informó de los motivos de esta.

25. La Sra. Aibibu fue condenada inicialmente a cinco años de prisión por enviar dinero por transferencia bancaria a su padre, el Sr. Aibibu. La condena se incrementó posteriormente a 12 años de prisión. Se desconocen los cargos exactos y los fundamentos jurídicos de la condena, incluida la legislación pertinente aplicada.

26. La Sra. Aibibu permanece privada de libertad en paradero desconocido. Sus hermanos también están detenidos en un campo de reeducación.

27. La fuente sostiene que la actual reclusión en régimen de incomunicación sin cargos del Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu es un ejemplo más de la persecución que ejercen las autoridades contra personas de etnia uigur y que constituye una violación grave de los derechos humanos fundamentales que los asisten en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

iv) *Análisis jurídico*

28. La fuente sostiene que la detención de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las

categorías I, III y V de detención arbitraria aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

29. En relación con la categoría I, la fuente sostiene que, desde 2017, las autoridades han recluido a un elevado número de hombres y mujeres en campos de internamiento o prisiones ubicados en toda la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. La afirmación de que la detención masiva y en régimen de incomunicación está justificada para impedir el extremismo es incompatible con las obligaciones que incumben al Gobierno en virtud del derecho internacional. En este contexto, la fuente recuerda la comunicación conjunta de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en la que afirmaban que el reglamento de la Región Autónoma de Xinjiang Uigur sobre la desradicalización era incompatible con las obligaciones de China en virtud del derecho internacional de los derechos humanos².

30. La fuente recuerda también que el Grupo de Trabajo ha subrayado que el principio de legalidad requiere que las normas se formulen con suficiente precisión para que la persona pueda acceder a la ley y comprenderla, y regular su conducta en consecuencia³. Sin embargo, una detención o reclusión puede estar autorizada por la legislación nacional y ser, no obstante, arbitraria. El concepto de “arbitrariedad” no debe equipararse con el de “contrario a la ley”, sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad⁴. Con respecto a los “centros de reeducación”, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas han declarado que, debido a su carácter coercitivo, esos centros equivalen a centros de reclusión⁵, señala la fuente.

31. Además, la fuente recuerda que el término “extremismo”, cuando se utiliza como categoría jurídica penal, es irreconciliable con el principio de seguridad jurídica y, por tanto, es incompatible en sí mismo con el ejercicio de determinados derechos humanos fundamentales⁶. La legislación nacional que autoriza y establece los motivos y procedimientos para la detención y la reclusión debe ajustarse a las normas jurídicas internacionales. Ninguna privación de libertad fuera del contexto de los cargos penales deberá constituir una forma de eludir los límites del sistema de justicia penal e imponer el equivalente de una sanción penal sin las salvaguardias aplicables. La fuente afirma que el internamiento de personas de etnia uigur, incluidas las que se han mencionado, es arbitrario, puesto que se basa en una legislación contra el terrorismo demasiado amplia y manifiestamente imprecisa.

32. Tras sus visitas a China en 1997 y 2004, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria subrayó en sus informes sobre la cuestión que las acusaciones por delitos vagos e imprecisos ponían en peligro la capacidad de las personas para ejercer sus derechos fundamentales y podían dar lugar a una privación de libertad arbitraria⁷. Además, son formas de detención arbitraria la reclusión prolongada sin cargos ni juicio, y la reclusión secreta, la reclusión prolongada en régimen de incomunicación o la reclusión indefinida sin revisión, así como cualquier tipo de reclusión en el que no se reevalúe periódicamente la justificación para mantener a la persona recluida⁸.

33. La fuente afirma que la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu siguen siendo objeto de desaparición forzada, y lo son desde el momento en que fueron enviados a los campos de reeducación. La fuente recuerda que, de conformidad con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entenderá por desaparición forzada: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado

² Véase la comunicación CHN 21/2018. Todas las comunicaciones mencionadas en el presente informe pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

³ Véase la opinión núm. 66/2021, párr. 54.

⁴ Observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, párr. 12.

⁵ Véase la comunicación CHN 21/2018, pág. 6.

⁶ A/HRC/49/45, párrs. 33 y 34.

⁷ Véase la opinión núm. 15/2019, párr. 33.

⁸ Observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, párrs. 11 y 12.

o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (art. 2). La fuente alega que, si bien China no es Estado parte en esta Convención, está obligada por la prohibición de la desaparición forzada en virtud del derecho internacional consuetudinario. Se afirma que las personas que han sido trasladadas a campos de reeducación se encuentran efectivamente desaparecidas, incluidas las personas mencionadas más arriba. La fuente sostiene que la situación de esos campos constituye un caso a gran escala de desaparición forzada y reclusión arbitraria⁹.

34. La fuente alega que el internamiento de personas de etnia uigur, entre las que se encuentran la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu, constituye *prima facie* una violación de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

35. Además, la fuente afirma que no se han presentado acusaciones formales contra la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu, a quienes, por otra parte, no se ha brindado acceso a recursos jurídicos, ni se ha permitido mantener contacto fuera de los campos de reeducación y han permanecido privados de libertad durante períodos de tiempo no especificados, lo que equivale a desaparición forzada y reclusión arbitraria. En consecuencia, la prolongada reclusión en régimen de incomunicación de las personas mencionadas constituye una privación de libertad con arreglo a la categoría I.

36. La fuente sostiene que la desaparición forzada es *prima facie* una forma de detención arbitraria y que, por tanto, durante el período en que las cinco personas mencionadas fueron sometidas a reclusión forzada se vulneró su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

37. La fuente sostiene, además, que, al sustraer a la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu del amparo de la ley, la desaparición forzada les ha privado de las garantías jurídicas que les corresponden como personas privadas de libertad, incluido el derecho de *habeas corpus* y el derecho a ser llevado sin demora ante una autoridad judicial, lo que constituye una vulneración de los derechos de los autores consagrados en los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios.

38. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la fuente concluye que la detención y la actual reclusión de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu son arbitrarias y se inscriben en la categoría I, ya que carecen de fundamento jurídico, lo que contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

39. En relación con la categoría III, la fuente señala que las debidas garantías procesales constituyen uno de los principios del derecho a un juicio imparcial.

40. La fuente recuerda que, en el presente caso, la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu fueron objeto de una detención sin orden judicial y no fueron informados ni de los motivos de su detención ni de los cargos que se les imputaban. Fueron enviados por la fuerza a campos de reeducación. Han permanecido reclusos en ellos, en régimen de incomunicación, desde el momento de su detención. No han disfrutado de su derecho a informar a sus familiares ni a comunicarse con ellos; tampoco de su derecho a consultar con un abogado. Estos elementos constituyen *prima facie* violaciones de los principios 15 a 19 del Conjunto de Principios. Además, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reconoce el derecho a ser presentado sin demora ante una autoridad judicial tras la privación de libertad para impugnar su legalidad. En el artículo 10 de esa Declaración se impone a las autoridades encargadas de la detención la obligación de proporcionar información exacta sobre la detención de las personas y el lugar donde se cumple a los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga un interés legítimo. La Declaración también establece la obligación

⁹ Véase [A/HRC/WGEID/115/1](#), anexo I.

de mantener en todo lugar de detención oficial un registro oficial actualizado de los detenidos (art. 12).

41. La fuente declara que, en el presente caso, se ha vulnerado el derecho de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu a no ser privados arbitrariamente de su libertad y a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial. Así pues, el Gobierno ha violado, entre otros, los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto.

42. La fuente alega que, aunque la detención y la reclusión prolongada en régimen de incomunicación se inscriben en la categoría I del Grupo de Trabajo, estas prácticas vulneran también el derecho a un juicio imparcial. La reclusión secreta y en régimen de incomunicación constituye una vulneración muy grave de las normas que protegen el derecho de las personas a la libertad en virtud del derecho internacional. La arbitrariedad inherente a estas formas de privación de libertad reside en el hecho de que la persona queda desprovista de toda protección jurídica¹⁰.

43. La fuente recuerda que la reclusión en régimen de incomunicación es un tipo de privación de libertad en la que la comunicación de la persona reclusa con otros seres humanos está muy restringida o no existe y, en consecuencia, permanece fuera del alcance de la ley sin posibilidad de recurrir a procedimientos judiciales, incluido el recurso de *habeas corpus*. Así pues, cuando se le niega a una persona privada de libertad el contacto con sus familiares y con su abogado, ello implica que está reclusa en régimen de incomunicación.

44. Otro motivo de preocupación en relación con la reclusión en régimen de incomunicación es el hecho de que puede facilitar la tortura o constituir la en sí misma¹¹. En el Conjunto de Principios se establece explícitamente que no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días¹². A la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu se les ha negado el contacto con sus familiares y sus abogados.

45. La fuente observa que los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas reconocen que la reclusión prolongada en régimen de incomunicación puede facilitar la tortura o constituir la en sí misma. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha considerado que la reclusión prolongada en condición de incomunicación en un lugar secreto puede equivaler a tortura tal como se describe en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes¹³. La fuente sostiene que existe información fidedigna que apunta a que en los campos de reeducación se recurre de forma amplia y continuada a la tortura y los malos tratos. Por lo tanto, se afirma que el cuadro de violencia física y psicológica cometida en los campos y la reclusión prolongada en régimen de incomunicación de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu permiten inferir que han sido sometidos a tortura y malos tratos, lo que confiere asimismo a su privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a la categoría III del Grupo de Trabajo.

46. En relación con la categoría V, la fuente afirma que los casos de privación de libertad de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu son representativos de una pauta generalizada en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. La fuente afirma que las pruebas y las fuentes fidedignas indican que las autoridades actúan contra las minorías étnicas y religiosas de la región llevando a cabo una campaña de detenciones masivas y malos tratos por motivos étnicos.

47. La fuente recuerda que la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu son personas corrientes que residen en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur y que resultan ser de etnia uigur. Según la fuente, han sido perseguidos y detenidos por su identidad uigur, musulmana y turca.

¹⁰ A/HRC/22/44, párr. 60.

¹¹ *Ibid.*

¹² Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 15.

¹³ A/56/156, párr. 14; véase también la opinión núm. 55/2019, párr. 39.

48. Por consiguiente, la fuente sostiene que las cinco personas mencionadas fueron privadas de su libertad por motivos discriminatorios debido, entre otras cosas, a su origen étnico, su idioma y su religión. Afirma también que la privación de libertad de las personas mencionadas constituye *prima facie* un caso de privación de libertad por motivos discriminatorios y sigue una pauta de persecución contra otras personas con características distintivas similares (en este caso, la población uigur de Xinjiang). La fuente recuerda que más de un millón de uigures permanecen reclusos debido a su origen étnico¹⁴.

49. Por consiguiente, la fuente concluye que la privación de libertad de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu por motivos discriminatorios constituye una vulneración del derecho a gozar de igual protección de la ley y a no ser discriminado reconocido en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Constituye una vulneración del derecho internacional al tratarse de motivos de discriminación prohibidos. Por lo tanto, su privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría V.

b) Respuesta del Gobierno

50. El 26 de octubre de 2023, con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicaciones, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de China. Le pidió que le proporcionara, a más tardar el 26 de diciembre de 2023, información detallada sobre la situación en que se encontraban la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu, y que aclarara cuáles eran las disposiciones jurídicas que justificaban que siguieran privados de libertad y cómo se ajustaba su reclusión a las obligaciones contraídas por China en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo también exhortó al Gobierno chino a que velara por la integridad física y psíquica de esas personas.

51. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya presentado respuesta alguna a la comunicación y que tampoco haya solicitado una prórroga conforme a lo dispuesto en el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo.

2. Deliberaciones

52. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

53. Para determinar si la privación de libertad de las personas a las que se refiere la presente comunicación fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones¹⁵. En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

54. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que las alegaciones en el presente caso se refieren a cinco personas, todas ellas pertenecientes a la minoría uigur. En lo referente a la alegación de la fuente de que esas cinco personas están privadas de libertad en “campos de reeducación”, aunque se cree que inicialmente el Sr. Alimu estuvo recluso en una prisión y actualmente se encuentra en paradero desconocido, el Grupo de Trabajo recuerda que la privación de libertad no es solo una cuestión de definición jurídica, sino también de hecho. Si la persona interesada no tiene libertad para abandonar el lugar en que se encuentra privada de libertad, se han de respetar todas las salvaguardias apropiadas que se hayan previsto para evitar la detención arbitraria y se le ha de conceder el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal¹⁶. Además, el Grupo de Trabajo recuerda su visita a China en 1997 y su misión de seguimiento en 2004, y señala que en ambas misiones visitó campos de reeducación y los reconoció como lugares de privación de libertad¹⁷. Por lo tanto,

¹⁴ A/HRC/36/37, párr. 48.

¹⁵ A/HRC/19/57, párr. 68.

¹⁶ A/HRC/36/37, párr. 56.

¹⁷ Véanse E/CN.4/1998/44/Add.2 y E/CN.4/2005/6/Add.4, párr. 54, en particular.

el Grupo de Trabajo concluye que los campos de reeducación donde se encuentran son, sin duda, lugares de detención, ya que resulta obvio que están allí contra su voluntad y que no pueden marcharse.

55. Al llegar a esta conclusión, el Grupo de Trabajo también recuerda el reciente informe de seguimiento del estudio conjunto sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo, elaborado por la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo¹⁸. En su informe, la Relatora Especial señaló específicamente el internamiento de uigures en “campos de reeducación” y reiteró y subrayó la preocupación constante por las condiciones imperantes en esos centros, incluida la práctica de la “reeducación”, que vulneraban los derechos más fundamentales, como el derecho a no ser privado de libertad de forma arbitraria; el derecho al respeto de la vida familiar, incluida la prohibición de la separación forzada; y los derechos a la libertad de expresión, asociación y religión o creencias, así como otros derechos culturales, económicos y sociales¹⁹.

a) Categoría I

56. La fuente señala que la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu fueron objeto de una detención sin orden judicial y no fueron informados ni de los motivos de su detención ni de los cargos que se les imputaban. La Sra. Buvacir y su hija, la Sra. Bumeyrem, fueron detenidas en 2019. El Sr. Alimu fue detenido en 2017. Al parecer, su familia no pudo obtener ninguna información sobre su paradero durante dos años, cuando se supo que el Sr. Alimu podría encontrarse en una prisión de la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. El Sr. Aibibu fue detenido a su regreso de Türkiye y enviado a un campo de reeducación, liberado en enero de 2019 y detenido de nuevo en abril de 2020. La Sra. Aibibu fue detenida en 2017 y de nuevo en 2019.

57. Como ya ha señalado antes el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo en las circunstancias del caso²⁰. Esto suele hacerse mediante una orden de detención²¹ (o documento equivalente)²². Toda persona privada de libertad tiene derecho a ser informada sin demora de las acusaciones formuladas contra ella. Esto se recoge en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principios 2 y 10 del Conjunto de Principios. A falta de una respuesta del Gobierno y a la luz de las comunicaciones de la fuente, el Grupo de Trabajo concluye que se han violado los derechos de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu enunciados en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de los principios 2 y 10 del Conjunto de Principios.

58. La fuente afirma además que las personas afectadas fueron enviadas por la fuerza a campos de reeducación, donde permanecen incomunicadas desde su detención. No han podido informar a sus familiares ni comunicarse con ellos, y tampoco han disfrutado de su derecho a consultar con un abogado. Como ha declarado el Grupo de Trabajo, la reclusión en régimen de aislamiento vulnera el derecho de las personas a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal según lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos²³. El Grupo de Trabajo recuerda que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha estimado que la reclusión prolongada en régimen de incomunicación en un lugar secreto puede equivaler a tortura, según se define esta en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y ha señalado que la tortura se practica con mayor frecuencia durante la reclusión en régimen de incomunicación²⁴.

¹⁸ [A/HRC/49/45](#), párr. 33.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ En los casos de delito flagrante, no suele ser posible obtener una orden judicial.

²¹ Véanse las opiniones núms. 88/2017, párr. 27; 3/2018, párr. 43; y 30/2018, párr. 39.

²² Véase, por ejemplo, la opinión núm. 30/2017, párrs. 58 y 59.

²³ Véanse las opiniones núms. 45/2017, 46/2017, 35/2018, 9/2019, 44/2019, 45/2019, 15/2020, 16/2020 y 36/2020.

²⁴ [A/56/156](#), párrs. 14 y 39 f). Véase también la resolución 68/156 de la Asamblea General.

59. La supervisión judicial de la privación de libertad constituye una salvaguardia fundamental de la libertad personal²⁵ y un elemento esencial para garantizar que la reclusión tenga fundamento jurídico. Habida cuenta de que ni la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu pudieron impugnar su privación de libertad, también vieron vulnerado su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, fueron sustraídos a la protección de la ley, en violación de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A este respecto, el Grupo de Trabajo subraya sus conclusiones tras su misión a China en 2004, en las que afirmaba con claridad que el hecho de que el ordenamiento jurídico chino clasificase la reeducación por el trabajo como una privación de libertad administrativa en contraposición a la judicial regida por el derecho penal no afectaba a la obligación de China de garantizar el control judicial de esta forma de privación de libertad²⁶.

60. El Grupo de Trabajo recuerda que conceder acceso rápido y regular a los familiares, así como a personal médico y abogados independientes, es una salvaguardia esencial y necesaria contra la detención arbitraria, que contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como una salvaguardia para la prevención de la tortura²⁷. Además, prohibir el contacto con el mundo exterior infringe la regla 58 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)²⁸ y los principios 15, 16, párrafo 1, y 19 del Conjunto de Principios.

61. Además, su imposibilidad de ponerse en contacto con abogados durante este tiempo, alegación que no ha sido refutada por el Gobierno, ha menoscabado su derecho a impugnar la legalidad de su reclusión y a disfrutar del derecho a un juicio imparcial, enunciado en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principios 11, párrafo 1, 32 y 37 del Conjunto de Principios.

62. El Grupo de Trabajo considera además que la reclusión de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu en campos de reeducación sin permitirles tener contacto con el exterior constituye una desaparición forzada contraria al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La desaparición forzada está prohibida por el derecho internacional y constituye una forma particularmente grave de reclusión arbitraria²⁹. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

63. A ese respecto, el Grupo de Trabajo recuerda la evaluación publicada en 2022 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las inquietudes que suscitaban los derechos humanos en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur (China), en la que se documentó la persistente negativa de las autoridades a proporcionar cualquier información sobre la reclusión de personas pertenecientes a la minoría uigur y la práctica imposible de que sus familiares u otras personas pudieran averiguar su suerte. “Aunque algunos entrevistados parecían saber o sospechar que sus familiares habían sido trasladados a un centro de capacitación y formación profesional u otro tipo de centro de reclusión, la mayoría no estaban seguros de cuál era su situación y, a pesar de sus intentos por que las autoridades les informaran de su paradero, seguían sin conocer su suerte. Esta falta de información y de cualquier tipo de contacto ha sido especialmente dolorosa para las familias que viven a gran distancia en el extranjero y requiere una aclaración inmediata por

²⁵ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 3.

²⁶ E/CN.4/2005/6/Add.4, párr. 54.

²⁷ Opinión núm. 19/2022, párr. 52.

²⁸ Opiniones núms. 35/2018, párr. 39; 44/2019, párrs. 74 y 75; y 45/2019, párr. 76.

²⁹ Véanse las opiniones núms. 5/2020, 6/2020, 11/2020 y 13/2020.

parte de las autoridades”³⁰. El Grupo de Trabajo también ha recibido información igualmente escasa sobre la privación de libertad de uigures en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur³¹.

64. La fuente afirma que la reclusión de personas de etnia uigur, incluidas las que se han mencionado, es arbitraria, puesto que se basa en una legislación contra el terrorismo demasiado amplia y manifiestamente imprecisa. Aunque el Grupo de Trabajo no puede pronunciarse a este respecto por no disponer de suficiente información sobre la legislación, recuerda que la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha sostenido sistemáticamente que el término “extremismo” no tiene cabida en las normas jurídicas internacionales vinculantes y que, cuando se utiliza como categoría jurídica penal, es irreconciliable con el principio de seguridad jurídica y, por tanto, es incompatible en sí mismo con el ejercicio de determinados derechos humanos fundamentales³². Además, según esa Relatora Especial, la afirmación de que la detención masiva y en régimen de incomunicación está justificada por la “reeducación” para impedir el extremismo es incompatible con las obligaciones del Gobierno en materia de derecho internacional³³. El Grupo de Trabajo observa que, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 14º a 17º combinados de China, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación ante la información de que la definición amplia de terrorismo, las vagas referencias al extremismo y la poca claridad de la definición de separatismo de la legislación china podrían penalizar la expresión pacífica de ideas cívicas y religiosas y facilitar la elaboración de perfiles criminológicos de las minorías étnicas y etnicorreligiosas, como los musulmanes uigures, los budistas tibetanos y los mongoles³⁴.

65. A la luz de las consideraciones anteriores, el Grupo de Trabajo estima que la privación de libertad de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

b) Categoría III

66. El Grupo de Trabajo observa que parece saberse muy poco sobre el proceso judicial, si es que lo hubo, contra estas cinco personas. Tampoco se conocen los cargos que se les imputan y las fechas de sus juicios, así como los detalles de estos, si es que llegaron a celebrarse. El Gobierno tuvo la oportunidad de aclarar todo ello, pero optó por no hacerlo.

67. Al parecer, la Sra. Aibibu fue condenada a cinco años de prisión, que luego se aumentaron a 12 años, por enviar dinero mediante transferencia bancaria a su padre, pero la fuente señala que se desconocen los cargos exactos, los fundamentos jurídicos de la condena y la legislación pertinente aplicada. Se cree que su padre, el Sr. Aibibu, está recluso en un campo de reeducación en régimen de incomunicación, y se desconocen los motivos, los fundamentos jurídicos y la legislación pertinente aplicada respecto de su reclusión, así como su paradero exacto. En el caso del Sr. Alimu, su familia no logró, por lo visto, obtener información alguna sobre su paradero hasta que se supo que podría estar en una prisión de la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. Siguen sin conocerse los motivos, los fundamentos jurídicos y la legislación pertinente aplicada en lo que se refiere a su reclusión, así como su paradero exacto. Aunque finalmente se autorizó al Sr. Alimu permiso a hablar con un pariente cercano, el contacto no se produjo porque solo se les permitió hablar en chino, idioma que el pariente desconocía; la conversación no tuvo lugar, y ahora está incomunicado.

68. La fuente afirma que la reclusión de personas de etnia uigur es arbitraria, puesto que se basa en una legislación contra el terrorismo demasiado amplia y manifiestamente imprecisa. El Grupo de Trabajo recuerda que, tras sus visitas a China en 1997 y 2004, subrayó en sus informes sobre la cuestión que las acusaciones por delitos vagos e imprecisos ponían

³⁰ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region”, párr. 132. Puede consultarse en <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf>.

³¹ Véanse las opiniones núms. 6/2022, 88/2022, 6/2023, 38/2023 y 77/2023.

³² A/HRC/49/45, párr. 33.

³³ *Ibid.*

³⁴ CERD/C/CHN/CO/14-17, párr. 36.

en peligro la capacidad de las personas para ejercer sus derechos fundamentales y podían dar lugar a una privación arbitraria de libertad³⁵. Además, son formas de detención arbitraria la reclusión prolongada sin cargos ni juicio, la reclusión secreta, la reclusión prolongada en régimen de incomunicación o la reclusión indefinida sin revisión, así como cualquier tipo de reclusión en el que no se reevalúe periódicamente la justificación para mantener a la persona reclusa. El Grupo de Trabajo también observa que las cinco personas parecen estar en una situación de privación de libertad indefinida *de facto* en un llamado “campo de reeducación”. Recuerda la observación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de que un gran número de uigures y miembros de otras minorías musulmanas han sido objeto de detención y reclusión en régimen de incomunicación, a menudo durante largos períodos de tiempo, sin haber sido acusados de ningún delito ni enjuiciados, so pretexto de luchar contra el extremismo religioso³⁶. Ese parece ser el caso de las cinco personas objeto de la presente comunicación y, como estipula claramente el Grupo de Trabajo en su deliberación núm. 4, esa situación es intrínsecamente arbitraria por cuanto contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

69. En cuanto a las garantías procesales pertinentes para la arbitrariedad según la categoría III, existe un considerable solapamiento con las cuestiones planteadas en el análisis relativo a la categoría I anterior. La falta de fundamentos para la detención en la categoría I y la falta de garantías procesales en la categoría III están relacionadas entre sí³⁷. La fuente alega violaciones de las garantías procesales, que son fundamentales para el derecho a un juicio imparcial. A falta de explicaciones por parte del Gobierno, el Grupo de Trabajo observa que la grave opacidad en relación con los cargos por los que están reclusas las cinco personas —sin que haya indicios de que su situación se vaya a aclarar—, su reclusión en régimen de incomunicación y la ausencia de claridad en torno a su juicio, si es que se celebró alguno, la inexistencia de un foro donde impugnar su privación de libertad, la falta de acceso a un abogado, su reclusión indefinida y prolongada y el hecho de que no hayan sido puestas en libertad constituyen arbitrariedad con arreglo a la categoría III y vulneran los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 32, párrafo 1; 37 y 38 del Conjunto de Principios.

70. La fuente ha alegado además que se ha violado el derecho de esas personas a ser juzgadas por un tribunal independiente e imparcial. El Grupo de Trabajo no puede pronunciarse sobre esta alegación por no disponer de suficiente información. Teniendo en cuenta el secretismo y la escasez de información sobre los procedimientos judiciales relativos a estas cinco personas, si es que se llevaron a cabo, el Grupo de Trabajo indica que el Gobierno posee esa información, pero no la ha facilitado a las familias de las cinco personas ni ha respondido a las alegaciones al respecto. El Grupo de Trabajo expresa preocupación por el secretismo que parece rodear la suerte y el paradero de los cinco afectados. Sus familiares en el extranjero no han podido conocer los detalles exactos de su detención y sus juicios ni su paradero exacto. En su resolución 37/3, el Consejo de Derechos Humanos subrayó que nadie podrá ser sometido a detención secreta y exhortó a los Estados a que investigasen todos los presuntos casos de esta, incluidos aquellos en que se hubiese utilizado como pretexto la lucha contra el terrorismo³⁸.

71. La fuente sostiene que existe información fidedigna sobre el uso amplio y continuado de la tortura y los malos tratos y la existencia de un cuadro de violencia física y psicológica en los campos de reeducación. A este respecto, la fuente recuerda la prolongada reclusión en régimen de incomunicación de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeirem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu. La fuente observa también que los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas reconocen que la reclusión prolongada en régimen de incomunicación puede facilitar la tortura o constituir la en sí misma. A pesar de estas alegaciones, el Grupo de Trabajo no puede llegar a una conclusión, debido a la insuficiente información sobre los presuntos actos de tortura. No obstante, recuerda la conclusión del estudio conjunto sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el

³⁵ Véase la opinión núm. 15/2019, párr. 33.

³⁶ CERD/C/CHN/CO/14-17, párr. 40 a).

³⁷ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 89/2017, párr. 44.

³⁸ Véase también A/HRC/13/42, apartado II.B.1.

terrorismo, según la cual la detención secreta estaba vinculada a la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes³⁹.

72. Habida cuenta de las graves violaciones alegadas más arriba y de las conclusiones precedentes, el Grupo de Trabajo considera que las violaciones del derecho de las cinco personas privadas de libertad a un juicio imparcial son de gravedad suficiente para alcanzar el umbral de la categoría III. Para llegar a esa determinación, el Grupo de Trabajo tiene especialmente en cuenta las conclusiones que formuló tras su misión de seguimiento en China en 2004⁴⁰ específicamente sobre los campos de reeducación y la falta de respuesta del Gobierno en el presente caso.

c) Categoría V

73. La fuente afirma que los casos de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu son representativos de una pauta generalizada de reclusión en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur, donde las autoridades actúan contra las minorías étnicas y religiosas llevando a cabo una campaña selectiva de detenciones masivas y malos tratos. Las cinco personas a que se refiere la comunicación son ciudadanos corrientes de etnia uigur que residen o residían en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur y han sido perseguidas y detenidas por su identidad uigur, musulmana y turca. Por consiguiente, la fuente sostiene que han sido privadas de libertad por motivos discriminatorios, entre otras cosas debido a su origen étnico, su idioma y su religión. Afirma también que su privación de libertad constituye *prima facie* un caso de privación de libertad por motivos discriminatorios y sigue una pauta de persecución contra otras personas con características distintivas similares (en este caso, la población uigur de Xinjiang). La fuente recuerda que más de un millón de uigures permanecen recluidos debido a su origen étnico⁴¹.

74. El Grupo de Trabajo recuerda el reciente informe de seguimiento del estudio conjunto sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo, elaborado por la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En él, la Relatora Especial detalló las prácticas de detenciones secretas masivas y arbitrarias, junto con otras graves violaciones del derecho internacional dirigidas a los uigures y mencionó el flujo continuo de información creíble que apuntaba a una práctica sostenida de detenciones arbitrarias masivas⁴². El Grupo de Trabajo también observa que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación, en el marco de sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente, por el carácter discriminatorio de las restricciones severas e indebidas a una amplia gama de derechos humanos, dirigidas mayoritariamente contra los uigures y otras comunidades étnicas musulmanas en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur⁴³.

75. El Grupo de Trabajo observa que este es un ejemplo más de la serie de casos en los que ha constatado que China persigue a los uigures⁴⁴. Habida cuenta de los argumentos no refutados de la fuente de que todas las personas privadas de libertad también fueron perseguidas por su origen étnico uigur, y dadas las circunstancias similares en los demás casos de privación de libertad de uigures para su traslado a campos de reeducación, el Grupo de Trabajo considera que la fuente ha demostrado que todas esas reclusiones se practicaron con carácter discriminatorio.

76. La escasez de información y la falta de procedimientos judiciales conocidos indican asimismo que su etnia uigur fue la razón común y discriminatoria de su detención. A este respecto, el Grupo de Trabajo observa con alarma que, al parecer, la mayoría de los familiares

³⁹ [A/HRC/13/42](#), párr. 34. Véase también la opinión núm. 55/2019, párr. 39.

⁴⁰ [E/CN.4/2005/6/Add.4](#), párrs. 54 a 59.

⁴¹ [A/HRC/36/37](#), párr. 48.

⁴² [A/HRC/49/45](#), párr. 33.

⁴³ Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, decisión núm. 1/108, de 23 de noviembre de 2022.

⁴⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 3/2014, 66/2021, 6/2022, 64/2022, 88/2022, 6/2023 y 38/2023. Véanse también “OHCHR assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region” y [A/HRC/36/37](#), párr. 48.

de la Sra. Buvacir y la Sra. Bumeyrem que residen en China también están, al parecer, privados de libertad. En 2018, se supo que toda la familia del Sr. Aibibu que residía en China, incluida su hija, la Sra. Aibibu, estaba internada al parecer en campos de reeducación. Recuerda que la Sra. Buvacir y la Sra. Bumeyrem son madre e hija y que el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu son padre e hija. La Sra. Aibibu está privada de libertad en un “campo de reeducación” y sus hermanos han corrido la misma suerte.

77. Por todo ello, el Grupo de Trabajo considera que la detención de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu es arbitraria conforme a la categoría V. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre cuestiones de las minorías y al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias para que lo sigan examinando.

d) Observaciones finales

78. La fuente señala que existe una gran preocupación por la salud del Sr. Alimu y del Sr. Aibibu, que tienen más de 80 años de edad. El Grupo de Trabajo recuerda que todos los Gobiernos tienen el deber de tratar a todos los reclusos con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos, de conformidad con lo dispuesto en la regla 1 de las Reglas Nelson Mandela.

79. El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por lo que parece ser una práctica de reclusión de familiares y un fenómeno de “puerta giratoria” consistente en detenciones, puestas en libertad y nuevas detenciones, como es el caso del Sr. Aibibu y su hija, la Sra. Aibibu. También se alega que, en 2018, se supo que todos los familiares del Sr. Aibibu que residían en China habían sido internados en campos de reeducación. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya colaborado con él de manera constructiva y oportuna, respondiendo a las alegaciones relativas a la reclusión de personas en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur⁴⁵.

80. En sus 30 años de historia, el Grupo de Trabajo ha determinado que China ha vulnerado sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en numerosos casos⁴⁶. Al Grupo de Trabajo le preocupa que esto indique la existencia en China de un problema sistémico en relación con la detención arbitraria, que constituye una grave vulneración del derecho internacional. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otros tipos de privación grave de libertad contrarios a las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad⁴⁷.

81. El Grupo de Trabajo vería con agrado la posibilidad de realizar una visita a China. Dado que ha transcurrido un tiempo considerable desde su anterior misión al país, en septiembre de 2004, estima que sería conveniente organizar otra. El Grupo de Trabajo espera una respuesta favorable a su solicitud formulada el 15 de abril de 2015.

⁴⁵ Opiniones núms. 6/2022, 88/2022 y 38/2023, párr. 21.

⁴⁶ Véanse las decisiones núms. 43/1993, 44/1993, 53/1993, 63/1993, 65/1993, 66/1993, 46/1995 y 19/1996, y las opiniones núms. 30/1998, 1/1999, 2/1999, 16/1999, 17/1999, 19/1999, 21/1999, 8/2000, 14/2000, 19/2000, 28/2000, 30/2000, 35/2000, 36/2000, 7/2001, 8/2001, 20/2001, 1/2002, 5/2002, 15/2002, 2/2003, 7/2003, 10/2003, 12/2003, 13/2003, 21/2003, 23/2003, 25/2003, 26/2003, 14/2004, 15/2004, 24/2004, 17/2005, 20/2005, 32/2005, 33/2005, 38/2005, 43/2005, 11/2006, 27/2006, 41/2006, 47/2006, 32/2007, 33/2007, 36/2007, 21/2008, 29/2008, 26/2010, 29/2010, 15/2011, 16/2011, 23/2011, 29/2011, 7/2012, 29/2012, 36/2012, 51/2012, 59/2012, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 8/2014, 21/2014, 49/2014, 55/2014, 3/2015, 39/2015, 11/2016, 12/2016, 30/2016, 43/2016, 46/2016, 4/2017, 5/2017, 59/2017, 69/2017, 81/2017, 22/2018, 54/2018, 62/2018, 15/2019, 36/2019, 72/2019, 76/2019, 11/2020, 32/2020, 78/2020, 82/2020, 25/2021 y 30/2021.

⁴⁷ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 1/2011, párr. 21; 37/2011, párr. 15; 38/2011, párr. 16; 39/2011, párr. 17; 4/2012, párr. 26; 38/2012, párr. 33; 47/2012, párrs. 19 y 22; 50/2012, párr. 27; 60/2012, párr. 21; y 35/2019, párr. 65.

3. Decisión

82. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Alavedi Buvacir, Hudavedi Bumeyrem, Abudukelimu Alimu, Abuduli Aibibu y Bahaguli Aibibu es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

83. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de China que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

84. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

85. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

86. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al Relator Especial sobre cuestiones de las minorías y al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias para que tomen las medidas correspondientes.

87. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

4. Procedimiento de seguimiento

88. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se ha puesto en libertad a la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu y, de ser así, en qué fecha;

b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu;

c) Si se ha investigado la violación de los derechos de la Sra. Buvacir, la Sra. Bumeyrem, el Sr. Alimu, el Sr. Aibibu y la Sra. Aibibu y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de China con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

89. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

90. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados

para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

91. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁴⁸.

[Aprobada el 18 de marzo de 2024]

⁴⁸ Resolución 51/8 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 6 y 9.